

«UNA CASA COMO REGALO»: ECONOMÍAS MORALES Y ECONOMÍAS POLÍTICAS EN LAS VIVIENDAS PÚBLICAS DE SÍDNEY

MAYANE DORE

Research associate

Lancaster University

maydore@gmail.com · <https://orcid.org/0000-0003-1367-1973>

RESUMEN: Este artículo examina el sistema de reciprocidad y moralidad asociado al uso de las viviendas públicas en Sídney, Australia. A través de un estudio etnográfico realizado en el barrio de Waterloo, el artículo analiza la centralidad que ocupan las moralidades cotidianas para dar continuidad, o incluso para profundizar, en las desigualdades estructurales y en la acumulación de capital en la ciudad de Sídney. Estudios recientes centran el análisis de la vivienda y su economía moral en las hipotecas y en la financiarización del sistema; no obstante, este trabajo analiza el caso concreto de las renovaciones de viviendas públicas. De esta forma, en la primera parte del artículo discuto cómo el derecho a la vivienda pública pasó de ser entendido como parte de un contrato social a integrar un sistema de vigilancia y penalización. En la segunda parte, analizo el acto de recibir una vivienda del Gobierno y las obligaciones morales que este acto conlleva. Como conclusión, el artículo discute cómo las desigualdades estructurales y la acumulación de capital se realizan a nivel local a través de normas, significados y prácticas concretas.

PALABRAS CLAVE: urbanismo neoliberal, economías morales, vivienda, renovación urbana, política habitacional.

“A HOUSE AS A GIFT”: MORAL ECONOMIES AND POLITICAL ECONOMIES IN SYDNEY’S PUBLIC HOUSING

ABSTRACT: This article examines the system of reciprocity and morality associated with the use of public housing in Sydney, Australia. Drawing on ethnographic research conducted in the Waterloo district of the city, the article analyses the central role played by everyday moralities to perpetuate, or even accentuate, structural inequalities and capital accumulation in Sydney. Recent studies have focused their analysis of housing and moral economy on mortgages and the financialization of the system. In this study, however, I examine the specific case of public housing renovation. In the first part of the article, I discuss how public housing changed from being perceived as part of a social contract to becoming integrated within a system of surveillance and penalization. In the second part, I analyze the act of receiving a government-owned house and the moral obligations involved in that act. As a conclusion to the article, I discuss how structural inequalities and capital accumulation are created at the local level via specific dynamics related to norms, meanings and practices.

KEYWORDS: neoliberal urbanism; moral economies; housing; urban renewal; housing policy.

1. Introducción

En marzo de 2019 me uní a un grupo de teatro del barrio de Waterloo, ubicado en el centro de Sídney, Australia. El grupo formaba parte de una iniciativa financiada por el ayuntamiento, y tenía por objetivo crear un espectáculo teatral sobre el proceso de renovación de las viviendas públicas del barrio. La originalidad de la iniciativa estaba en el hecho de que serían las propias inquilinas de las viviendas públicas las que crearían e interpretarían el espectáculo. Interesada en este proceso, acompañé al grupo durante los tres meses completos del proyecto y participé de sus intensas discusiones sobre los aspectos positivos y negativos de vivir en Waterloo. De todas las discusiones, hubo una en concreto que llamó nuestra atención como grupo y que cambió el rumbo de nuestros encuentros; fue un ejercicio que definió nuestra presentación final de teatro y que inspira en gran medida este artículo.

Sophia, una de las coordinadoras del proyecto, propuso una actividad de calentamiento donde deberíamos ofrecer regalos imaginarios a las compañeras del grupo y expresar cosas que nos gustaría tener en nuestros hogares¹. Sophia comenzó la actividad con una demostración para darnos un ejemplo. Sujetando una caja vacía, miró a otra persona del círculo y se la dio: «Hola, te ofrezco un regalo para tu hogar. Dentro tiene un hermoso jardín para ti». Siguiendo la propuesta del juego, la siguiente persona que recibiera el regalo debería, primero, agradecer y, luego, ofrecer, la caja a otra persona, añadiendo una nueva sorpresa ficticia representada por la caja: una pared azul, una vista bonita, una silla de madera. La idea inicial de la actividad era compartir cosas que nos gustaría tener en nuestras casas, ofrecernos regalos e imaginar nuestro hogar ideal.

Sin embargo, según empezó el juego, los participantes comenzaron a transformar su propósito original y cambiar gradualmente su enfoque optimista hacia un juego irónico y crítico. Esto ocurrió porque las vecinas comenzaron a interpretar cómo se sentían, en la práctica, al recibir como «regalo» una casa por parte del Gobierno: «Hola, aquí tienes esta casa como regalo», dijo Lisa, una participante, «tiene goteras y no tiene agua caliente». Aunque en la actividad no se esperaba este tipo de regalo

¹ Todos los nombres utilizados en este artículo son pseudónimos.

crítico, las demás participantes rieron inmediatamente por su improvisación y reconocieron la experiencia de recibir una casa que decía ser un regalo, pero que, en realidad, estaba repleta de problemas. Después del humor irónico de Lisa, otra integrante se animó a continuar con el juego del mismo modo: «Aquí lo tienes. Está lleno de cucarachas».

La actividad de calentamiento pronto se convirtió en un juego divertido. Las residentes se rieron y criticaron juntas sobre lo que significaba ser inquilinas de viviendas públicas y tener al Estado como propietario. En concreto, durante nuestras discusiones, comentaron que el acceso a la vivienda, para ellas, nunca era un acto voluntario o altruista por parte del Estado, sino condicional. En la práctica, ellas sabían que siempre se esperaba algo a cambio; no lo sentían como un regalo.

Este ejercicio resultó tan revelador para el grupo que decidimos convertirlo en una de nuestras escenas de presentación final. El título sería «Una Casa como Regalo» (*The Gift of a Home*). La escena representaría la experiencia de humillación y sospecha constante hacia los inquilinos de viviendas públicas, enmascarada por el concepto de un «regalo» voluntario: la escena representaría a un agente del Gobierno sujetando una llave y eligiendo a alguien para recibir un nuevo hogar —sería «el elegido», como lo llamábamos entre nosotras—. Sin embargo, en lugar de simplemente dar la llave, el agente dudaría y haría miles de preguntas al potencial beneficiario: «¿Sabes lo privilegiado y afortunado que eres?»; «¿Limpiarás esta casa todos los días? ¿Sabes cómo limpiar una casa?». La idea era que, mientras hacía esas preguntas, el potencial beneficiario tendría siempre que responder afirmativamente y agradecer por dicho servicio («sí», «gracias»), aunque en el fondo se sintiera avergonzado y humillado por tener que rogar un lugar para vivir.

Aunque intencionalmente exagerado, este ejercicio y la escena final dramatizaron una dinámica común entre propietarios estatales y residentes de viviendas públicas: la obligación de reciprocidad asociada al recibimiento de una casa. En otras palabras, a través de un humor irónico, la escena destacó la relación de intercambio que subyace en el sistema de viviendas públicas en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia. La actuación representó el sistema de derechos y obligaciones morales que

informa las prácticas y comportamientos cotidianos de sus residentes y, en última instancia, regula sus ideales de ciudadanía.

Partiendo de esta idea, en este artículo analizo cómo esta economía moral está relacionada con una economía política más amplia que acentúa las desigualdades sociales locales. Conviene contextualizar que, en diciembre de 2015, el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur de Australia anunció un importante proyecto de renovación para las viviendas públicas del barrio de Waterloo. Como parte del plan, todos los edificios serían demolidos y reconstruidos siguiendo el principio denominado localmente como *social mix*, que incluye una nueva proporción de 70% de viviendas privadas y 30% de viviendas «sociales», estatales y administradas por organizaciones no gubernamentales. Además, gran parte del terreno público sería vendido con la expectativa de que los fondos recaudados pudieran financiar integralmente la renovación, que pretendía triplicar sus 2.000 unidades actuales. En este contexto, diferentes autores como Wynne (2018) y Dallas (2020) argumentan que la renovación de Waterloo participa en un proyecto más amplio de urbanismo neoliberal, que incluye la privatización de la tierra pública y una forma de gentrificación inducida por el Estado.

Este artículo trata de entender cómo una intervención de tal relevancia —que incluye la demolición total de uno de los conjuntos de viviendas públicas más grandes del país— se legitima a través de sistemas morales que incluyen los actos de dar, recibir y retribuir (Mauss, 1923). En otras palabras, el artículo analiza cómo las relaciones de moralidad cotidiana sostienen medidas de un urbanismo neoliberal que van en contra de los intereses locales. Aunque el análisis de las economías morales asociadas a la vivienda no es una contribución necesariamente novedosa (véanse, por ejemplo, Palomera [2014] y Sabaté [2009]), en este artículo trato de ir más allá de las economías morales asociadas a la deuda y a las hipotecas. En el artículo busco arrojar luz sobre el caso concreto de los usos, mantenimientos y renovaciones de las viviendas públicas.

Para discutir estas cuestiones, exploro etnográficamente mi participación en este grupo de teatro junto con las narrativas y trayectorias de tres inquilinas de Waterloo. Al centrarme en estas tres protagonistas,

busco ofrecer relatos de vida que ilustran cómo dinámicas más globales se desarrollan en el contexto local de las ciudades y afectan historias concretas. De este modo, trabajo sobre los relatos individuales y subjetivos de estos sujetos analizando cómo estos también son el reflejo de una configuración de valores y normas específicas. Cabe resaltar que, al tiempo que dichos relatos no pretenden ser exhaustivos ni generalizables a todos los vecinos y vecinas de Waterloo, sí reflejan trazos comunes y contrastados con un material etnográfico recogido durante catorce meses de trabajo de campo. Este material forma parte de mi investigación doctoral e incluye trece entrevistas con residentes, agentes comunitarios y estatales, además de notas de diversas reuniones y documentos oficiales del Gobierno.

2. Economías morales: una breve revisión

El concepto de *economía moral* fue propuesto inicialmente por Thompson (1971) al analizar importantes revueltas populares en Inglaterra durante el siglo XVIII. En concreto, en el contexto de una economía capitalista emergente, Thompson llamaba la atención sobre cómo una economía moral —es decir, un conjunto de normas y obligaciones sociales— orientaba las acciones colectivas contra el aumento del precio de los cereales. Según el autor, durante este episodio, más allá de las motivaciones del hambre, existía una cobranza moral hacia el derecho a la alimentación básica. Así, con este trabajo, Thompson desafió una economía asociada a la racionalidad y a la maximización, también vinculando la economía moral a una transición política social más amplia.

De manera similar, James Scott (1976) utilizó el concepto de economía moral para comprender la movilización campesina en Vietnam. En aquel caso, él utilizó el concepto para comprender la acción colectiva no tanto como el resultado directo de una explotación creciente e insostenible, sino más bien como el cambio de un régimen de reciprocidad que permitía a los campesinos un nivel de vida mínimo, frente a un sistema económico nuevo y arriesgado. Similar a Thompson, Scott estimuló, por tanto, un análisis de los comportamientos políticos más allá de las perspectivas económicas y universales. Integró en su análisis la comprensión

de los valores locales, así como las obligaciones morales que sostenían las estructuras sociales locales.

Sin embargo, siguiendo a Palomera y Vetta (2016), es posible identificar tres problemas principales con estos análisis que aún resuenan en estudios contemporáneos. En primer lugar, los usos iniciales del término *economía moral* tendían a restringirlo a grupos específicos, como «los campesinos», o «la multitud», en el caso de Thompson. Así, en lugar de un sistema interconectado, la economía moral corre el riesgo de ser esencializada para referirse a un solo grupo aislado. En segundo lugar, en las narrativas de economía moral, es común partir de una supuesta ruptura con un sistema moral anterior. En la mayoría de los casos, el pasado se ve a través de una lente demasiado optimista, a veces considerada como inherentemente buena (Götz, 2015: 154). En tercer lugar, el estrecho vínculo de este concepto con la teoría de la incrustación de Polanyi (2001) conduce a una comprensión de las economías morales como una dimensión separada del análisis de la economía política y la dinámica del mercado global. De hecho, las economías morales han cobrado especial relevancia en los estudios recientes sobre formas alternativas de actividad económica que emergen en oposición a las prácticas capitalistas hegemónicas.

En este estado de cosas, este artículo busca contribuir a la discusión de economías morales destacando la centralidad de las moralidades cotidianas para continuar, o incluso profundizar, la desigualdad estructural y la acumulación de capital. Para ello, sigo la definición de economía moral propuesta por Didier Fassin (2009): «[...] la producción, distribución, circulación y uso de sentimientos, emociones y valores morales, y normas y obligaciones en el espacio social» (Fassin, 2009: 37). Destaco concretamente de esta definición los modos por los cuales las economías morales pueden articular formas de dominación y violencia simbólica (Alexander *et al.*, 2018). Siguiendo a Narotzky (2015), comparto una conceptualización de la economía moral en la que las desigualdades estructurales se materializan a través de dinámicas de normas, significados y prácticas. En consecuencia, el énfasis dado en este artículo a la economía moral no pretende desconsiderar la economía política, es decir, la relación entre el capital, la clase y el Estado, que esencialmente da forma a la renovación

de Waterloo. Más bien, el artículo revela cómo tanto la economía moral como la política se encuentran entrelazadas en la vida cotidiana de sus residentes.

El argumento del artículo será estructurado en tres partes principales. Primero analizaré los cambios políticos en la provisión de viviendas públicas en Australia, ofreciendo el contexto histórico y político en el cual la discusión del artículo se centra. En la segunda parte me basaré en los relatos de tres inquilinas de Waterloo para discutir cómo esos cambios económicos y políticos transforman nuestros regímenes de moralidad y afectan a cómo las residentes de Waterloo viven y perciben sus derechos sobre la vivienda. Por último, concluiré identificando el desajuste de percepción de la vivienda entre el Estado y sus ciudadanos, enseñando cómo los cumplimientos e incumplimientos de obligaciones morales surgen como condición de posibilidad del proyecto de renovación de Waterloo.

3. Viviendas públicas en Australia

El actual sistema de viviendas públicas de Australia tuvo su antecedente durante el siglo xx, siendo el *Commonwealth Housing Agreement (CHA)* de 1945 el primer plan nacional que abordó la vivienda como un problema social en el país. Este plan es comúnmente interpretado como parte de un Estado de bienestar keynesiano emergente durante la posguerra en Australia, donde estaba legitimada la intervención del Estado en las políticas de vivienda (Pawson *et al.*, 2019). Como parte de este plan, hasta 1956 se construyeron más de 96.000 viviendas públicas, lo que representaba el 14,4% de la construcción en ese momento (Troy, 2012). Este primer acuerdo tuvo un impacto crucial en el acceso a la vivienda australiana, aunque no sin problemas. El plan idealizaba en gran medida un modelo normativo de familia, donde el hombre blanco asalariado y su familia eran los destinatarios preferidos del programa. Aun así, por única vez en su historia, Australia estimuló más el alquiler de viviendas públicas que su compra y propiedad individual (Hayward, 1996).

Sin embargo, con la promulgación del segundo acuerdo en 1956, las políticas de vivienda gradualmente se revirtieron. El Gobierno de Menzies (1949-1966) alivió el desincentivo a la adquisición de viviendas públi-

cas y lentamente promovió su privatización al ofrecer subvenciones que facilitaron la compra de ellas por sus inquilinos. Como resultado, se vendió el 6,6% de las viviendas públicas y la propiedad de viviendas aumentó del 54% a casi el 70% (Hayward, 1996). Del mismo modo, el fomento a la propiedad individual continuó en los siguientes *Commonwealth Housing Agreements* de 1961 y 1966, consolidando a Australia como uno de los países con niveles más altos de vivienda en propiedad del mundo.

En la década de los setenta, diferentes autores han observado un cambio de lo que podría considerarse un Estado de bienestar social a la neoliberalización gradual de la vivienda pública en Australia (Hayward, 1996). Durante este período, hubo una creciente preocupación por la necesidad de priorizar a los solicitantes de bajos ingresos en la asignación de viviendas. El informe de 1975 de la Comisión de Investigación sobre la Pobreza alimentó este debate. Este informe, también llamado Informe Henderson, generó dudas sobre los méritos de la vivienda pública al resaltar que casi tres cuartas partes de sus inquilinos estaban por encima del umbral de la pobreza en el país, mientras que una parte significativa de la población de bajos ingresos seguía luchando por acceder a una vivienda estable y adecuada (Henderson Report, 1975). Así, a pesar de justificadamente intentar extender el acceso de la vivienda a los ciudadanos más vulnerables, el informe tuvo como efecto el refuerzo de la asociación entre la pobreza y la vivienda pública.

La demanda por orientar las políticas de viviendas a los inquilinos de bajos ingresos, además de la creciente dificultad de su financiación, condujo en el sistema de viviendas australiano a cambios fundamentales. Por ejemplo, en 1976 el Gobierno de Nueva Gales del Sur estableció una política de alquileres de mercado con subvención para los inquilinos más vulnerables, basándose en criterios de elegibilidad cada vez más restringidos. Además, el Gobierno federal de Fraser (1975-1983) también estableció una política de venta de viviendas públicas a precio de mercado, reduciendo, así, la posibilidad de compra por parte de los inquilinos (Troy, 2012). Estas medidas se combinaron con un considerable corte de fondos públicos al sistema de vivienda.

Como consecuencia, este período se caracterizó por políticas de elegibilidad que cambiaron dramáticamente el perfil demográfico de los residentes de vivienda pública y el respectivo imaginario asociado a ellos. Los criterios de elegibilidad priorizaron a los inquilinos de bajos ingresos y cada vez más a las personas en situación de discapacidad, personas mayores con necesidades de cuidado, enfermedades mentales, dependencia de drogas y otras situaciones sociales complejas. Este proceso fue definido como la «residualización» de la vivienda pública y el sistema de bienestar en su conjunto: en este proceso la reducción de oferta de viviendas, junto con criterios de elegibilidad cada vez más estrictos, supuso el aumento de la concentración espacial de la pobreza y de otros problemas sociales (Morris, 2018). Durante las décadas anteriores los residentes de viviendas públicas eran en su mayoría hombres trabajadores, blancos, de ingresos bajos a moderados, y con familias. No obstante, las décadas siguientes vieron la creciente asociación de la vivienda pública con aquellos que no podían ser incluidos en el sistema de producción económica capitalista. Estos residentes fueron retratados cada vez más como dependientes, improductivos e indignos, alimentando la estigmatización territorial de sus barrios.

En las décadas siguientes, las políticas de vivienda mantuvieron su orientación hacia las lógicas de mercado. Como ejemplo, el *Commonwealth Rent Assistance* (CRA), creado en 1981, institucionalizó la subvención de alquileres dentro del mercado de las viviendas privadas. En esta misma década, como resultado, la lista de espera de vivienda pública prácticamente se duplicó (Hayward, 1996). Más adelante, en 1996 y 1999, las distintas autoridades estatales de vivienda también hicieron importantes recortes en los programas de construcción de viviendas: casi un 25% en comparación con los niveles de inversión de 1989 y 1990. Como resultado, el promedio anual de casas públicas en construcción cayó del 16% (1945-1970) al 3% a mediados de 1990 (Pawson *et al.*, 2019: 94).

El sistema de viviendas australianas poco a poco se desmantelaba. En Nueva Gales del Sur, el derecho al alquiler indefinido acabó en 2006 con la introducción de nuevos contratos de alquiler social a corto plazo: contratos de dos, cinco o diez años (NSW Government, 2010). Además, durante

el Gobierno de Baird en Nueva Gales del Sur, también se creó en 2014 una tasa extra por cada habitación vacante en una vivienda pública, y la limitación del tiempo de estancia que podían pasar los huéspedes invitados. Por último, en 2018 el Gobierno de Berejiklian creó un sistema de fianza a los inquilinos para cubrir posibles daños a las propiedades.

Con este breve repaso histórico es posible comprender cómo el estado actual de las viviendas públicas en Australia —actualmente representando menos del 5% del parque total de viviendas del país (Australian Institute of Health and Welfare, 2020)— es el resultado de políticas deliberadas que se han basado progresivamente en el apoyo a la propiedad individual, a la elegibilidad restrictiva, a los contratos de alquiler reducidos y a las lógicas del mercado en detrimento de los esquemas públicos de alquiler. En este contexto, el sistema de legitimidad asociado a estas viviendas también se ha reconfigurado, pasando de la metáfora del contrato social a un sistema de bienestar basado en supuestos méritos. Además, dado que cada sistema moral imagina y da forma a sus ciudadanos de manera diferente, el imaginario asociado a los beneficiarios de las ayudas del Gobierno también cambió. En concreto, pasaron de ser asociadas a familias de trabajadores a una «clase marginada».

Por último, al desnaturalizar y reconstruir la historia de los derechos sobre la vivienda, es posible identificar cómo los cambios en la economía política y moral redistribuyen las sensibilidades dentro de una sociedad, con importante implicación ética y de justicia social. Esto también se puede observar en la presentación final de teatro en la cual participé, «Una casa como regalo». En este ejemplo, las residentes de Waterloo reflejaron los efectos de estas políticas en su identidad como residentes de vivienda pública y en su relación con el Estado. Al denunciar las obligaciones y moralidades asociadas al acto de recibir una casa —presentada oficialmente como un «regalo»—, revelaron el impacto que estas tienen en sus trayectorias de vida. Al conocer en más profundidad las historias de estas residentes, Lisa, Sophia y Carla, percibimos cómo los cambios de la política de vivienda en Australia, y sus respectivos regímenes de moralidades, son vividos y percibidos por sus residentes en clave de merecimiento y gratitud.

4. Lisa, Sophia y Carla

4.1 Merecimiento

Lisa es una mujer de edad media, como muchas otras en Waterloo, que vive sola en uno de los edificios del barrio. Lisa primero solicitó una casa pública en la década de los ochenta y tuvo que esperar casi tres años para que le concedieran un apartamento. «Hasta ese momento, las casas eran para familias trabajadoras de bajos recursos», me explicó, «y entonces lo cambiaron para que pudieran postularse personas solteras y desempleadas. Esa era yo», me dijo en una entrevista en agosto de 2020. Cuando ella presentó la solicitud por primera vez, vivía en una casa ocupada que era propiedad del Departamento de Vivienda de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, cuando el Departamento recuperó el edificio para convertirlo en nuevos pisos, Lisa se quedó sin hogar. Mientras buscaba apoyo a través del mismo Departamento, un agente le recomendó modificar la solicitud y presentarla junto con su pareja. Según el agente, había pocas plazas de solo una habitación disponible, por lo que sería más fácil para ella solicitar una plaza de dos habitaciones si pudiera justificar vivir con otra persona². Por tanto, ya en aquella época los requisitos de elegibilidad y prioridad afectaban a la vida personal de sus solicitantes, como, por ejemplo, decidir mudarse y vivir o no con su pareja. En este caso, Lisa siguió el consejo del agente: «A veces puedes encontrar oficiales amables que realmente están ahí para ayudarte», me dijo irónicamente, y, de hecho, el consejo de esta persona cambió las posibilidades de vivienda de Lisa. Después de estar en la lista durante casi tres años, el cambio en su solicitud significó que le concedieran un piso de dos habitaciones en seis semanas. Aunque me pareció mucho tiempo, ella resaltó que esto fue relativamente rápido: «Ahora son como diez años», me dijo.

Con respecto a los trámites burocráticos, Lisa lo describió como un «contrato más o menos estándar». Sobre esto, dijo: «Solo tuve un contrato de alquiler que pedía mantener la propiedad en condiciones razonables». En su caso, este tipo de contrato «estándar», predecible, casi mecánico y

² Las políticas actuales permiten que las personas solteras soliciten apartamentos de dos habitaciones. Dado el creciente número de solicitudes individuales (personas jubiladas, viudas, divorciadas) y la falta de apartamentos de una habitación, las políticas cambiaron para facilitar la asignación.

repetitivo, era exactamente lo que Lisa estaba buscando. El «contrato estándar», para ella, significaba seguridad y una estabilidad materializada: «Tengo un contrato de alquiler de por vida», me dijo aliviada.

Carrie, otra mujer de mediana edad que vive en Waterloo, compartió el mismo sentimiento cuando se mudó a su apartamento. Me describió como un «alivio» poder finalmente estabilizarse. Por este motivo, en palabras de Lisa, un contrato de alquiler «estándar» tenía un significado especial para inquilinos de viviendas públicas: «[...] antes existía la idea, al menos en mi cabeza, de que debido a ese [alquiler de por vida], puedes tratarlo [el apartamento] como si fuera tu hogar. Puedes colgar cuadros, pintar, poner o quitar las alfombras como lo he hecho yo». Sin embargo, con la introducción de alquileres de corto plazo en Nueva Gales del Sur en 2006, ese sentido de pertenencia y propiedad había cambiado. Aunque esta regla solo se aplica a los nuevos contratos de alquiler después de 2005, la percepción de propiedad en el barrio ha cambiado significativamente. Para Lisa, ahora: «Si vienen a revisar, y has hecho un lío, o... tienes cosas rotas o... no sé... es mucho más fácil que te echen», me explicó en una entrevista. Los cambios graduales hacia una política neoliberal de vivienda tienen, por tanto, efectos concretos sobre las vidas y trayectorias de sus residentes, como en el caso de Lisa.

Con esa reflexión, Lisa llamó la atención sobre el régimen de merecimiento que subyace a la economía moral y política del actual sistema de vivienda. Específicamente, ella se refirió a la creciente necesidad de que los inquilinos de viviendas públicas demuestren que realmente merecen sus casas. Así, la trayectoria de vida de Lisa ilustra los cambios estructurales más amplios que significan y valoran el sistema de viviendas públicas en Australia, pasando de un contrato social a un sistema de «merecedores» que deben demostrar gratitud. Además, sus comentarios revelaron los efectos sociales de estos cambios en la forma en que los residentes dan sentido a sus propias condiciones de vida como inquilinos de viviendas públicas. Aunque Lisa llegó a sentir la seguridad de un contrato estable, e incluso la posibilidad de tratar su casa como efectivamente suya, actualmente temía por la condición de su futuro contrato, tras el anuncio de renovación de Waterloo. Cada vez más, su residencia se sentía precaria y condicional.

4.2 La *performance* del merecimiento

Durante mi trabajo de campo, pude presenciar diversos otros ejemplos de cómo los residentes intentan demostrar que son los legítimos poseedores de sus casas. En nuestros ensayos de teatro, Sophia, la coordinadora del proyecto, nos pidió un día que creáramos un gesto que representara lo que era importante para nosotras en nuestras casas: cómo vivimos en nuestra casa, cómo nos sentimos y qué hacemos, nos preguntó. Siguiendo esta orientación, Lisa, primero, creó una escena en la que bailaba libremente en su dormitorio privado. Carrie, por su parte, realizó una breve escena en la que soñaba con decorar su casa. Se sentó en el suelo y actuó como si estuviera leyendo una revista: «Una de esas revistas típicas de casa y decoración», nos explicó más tarde, «donde puedes hacer tu propia lista de deseos». En el suelo, con las piernas cruzadas, comenzó entonces a hojear las páginas de la revista imaginaria, hablando consigo misma, como si escuchara otra voz: «Ella me dijo que yo debería imaginar...», murmuró, mientras pasaba las páginas. «Ella me dijo que yo debería imaginar», repitió. En el acto siguiente, cerró bruscamente la revista y protestó, aún como parte de su interpretación: «¡Esto no está funcionando!». Luego, poco a poco, comenzó a soñar despierta durante su escena: se imaginaba pintando su casa de un color nuevo, poniendo una cortina azul y un baño nuevo. Durante esta escena, también jugó con los diferentes significados de necesitar y querer: «Quiero una lavadora», exclamó. «No la necesito... ¡Pero la quiero!», subrayó.

Inspirándonos en su actuación, comentamos la distinción que Carrie había propuesto entre necesitar realmente algo y querer las cosas por sí mismas. En la discusión, Lisa también se sintió inspirada a compartir su experiencia personal. Se quejó del hecho de que normalmente tenía que explicar a otros inquilinos por qué fumaba y cómo podía permitírselo. Considerando que un paquete de cigarrillos en Australia cuesta un promedio de 40 A\$, Lisa compartió los juicios morales con los que tenía que lidiar en su propia comunidad porque gastaba una proporción considerable de sus ingresos en tabaco. De la misma manera, también añadió que recientemente había sentido la necesidad de dar explicaciones sobre un reciente viaje a Londres.

Esta expectativa social ha sido identificada por Mark Peel (2003) como la «*performance* de la pobreza» en el contexto australiano. Durante su investigación sobre la pobreza en el país, Peel demostró cómo se exigen a los beneficiarios de asistencia social constantes explicaciones sobre su comportamiento, decisiones o aspiraciones, ya que deben «parecer precarios» para seguir siendo considerados merecedores. En el caso de Waterloo, detrás de los comentarios hechos sobre sus residentes, había una expectativa construida alrededor de los inquilinos de viviendas públicas sobre cómo deberían gastar sus ingresos personales. Como parte de un juicio colectivo, inquilinos de viviendas públicas sentían que deberían ser austeros y responsables financieramente. Gastos como viajes de ocio o la compra de un coche nuevo, como compartieron diferentes participantes del grupo de teatro, podrían malinterpretarse como caprichos o lujos. Del mismo modo, beber alcohol o fumar también podrían ser percibidos como comportamientos inmorales. Como resultado, las experiencias cotidianas de juicio moral llevaban a los residentes a sentir que su vida social era altamente regulada a través de un proyecto moral disciplinario que movilizaba una economía moral de culpa, reproche y vergüenza dentro de su propia comunidad.

Sin embargo, la *performance* de la pobreza no solo tiene efectos materiales sobre lo que uno puede comprar o hacer. Como expresó la actuación de Carrie sobre la lista de deseos de su casa, la necesidad de demostrar austeridad también tiene efectos dramáticos en las subjetividades de las inquilinas: en lo que se le permite o no a una persona pobre desear o no desear. Mientras Carrie afirmaba que no *necesitaba* una lavadora, sino que simplemente *quería* una, expresaba la expectativa de austeridad que se imponía sobre ella. Como su escena expresaba, se esperaba que los inquilinos de viviendas públicas solo tuvieran cosas realmente necesarias como condición básica de vida. En este sentido, la diferencia entre necesitar y desear refleja una disputa constante sobre los límites entre lo bueno y lo aceptable. En definitiva, revela los valores, las normas y las obligaciones morales inherentes a cualquier forma de desposesión (Palomera y Vetta, 2016).

Una última situación vivida durante nuestros ejercicios de teatro demuestra esta misma lógica de regulación entre lo necesario y lo deseado, lo merecido y el supuesto capricho. En una breve escena, Carrie elogió un cuadro que le gustaba mucho y que había recibido como regalo de un amigo cuando se mudó a Waterloo. El cuadro era hermoso y lo tenía colgado en su salón. Sin embargo, en su monólogo, nos dijo cómo escondía el cuadro cada vez que tenía una inspección del Gobierno en su casa. Ella temía que los inspectores vieran el cuadro, pensaran que era demasiado bonito y cuestionaran su derecho al apartamento. Así, simplemente imaginando esta situación, Carrie describió un miedo común, vivido por otros residentes del barrio. Estas amenazas, aunque, en realidad, no se efectuaran, actuaban como un mecanismo de autodisciplina, llevando a los residentes a regular sus propias aspiraciones, a ocultar de forma preventiva lo que *podrían* considerarse actividades inaceptables, e incluso a ocultar pertenencias que pensaban que *podrían* parecer sospechosas o inmorales para un residente de vivienda pública. En otras palabras, lo que indican estos relatos personales son las moralidades cotidianas que orientan el día a día de los residentes de Waterloo. Como revelan sus experiencias, en este barrio, para demostrar ser merecedores de sus viviendas, los residentes tenían que controlar y disciplinar sus comportamientos y apariencias.

4.3 Gratitud

Según las entrevistas realizadas con residentes de Waterloo, otro comportamiento implícito en las relaciones entre inquilinos y el Estado es la gratitud. Siguiendo esta lógica, las vecinas de Waterloo debían demostrar aprecio a sus viviendas debido al número limitado de unidades en el país y su creciente lista de espera. Sin embargo, lo que oculta este argumento es que el déficit de viviendas públicas es el resultado del cambio de políticas de acceso a la vivienda. La transición hacia medidas neoliberales alimenta la conceptualización de la vivienda pública como un privilegio, en vez de un derecho, o incluso como parte de un contrato social, como se podría haber concebido en décadas anteriores. Según este supuesto, los beneficiarios deben reconocer su privilegio y actuar con gratitud, in-

dependientemente de las condiciones de la vivienda, ubicación o servicio que recibían.

Durante la escena «La casa como regalo», Lisa señaló claramente esta relación. Ella ofreció una casa con goteras, sugiriendo que los residentes no deberían reclamar. En otras palabras, Lisa hizo explícita la percepción de que los inquilinos de vivienda pública no deben quejarse ni demandar mejoras del servicio. Más bien deben estar agradecidos por tener una vivienda, independientemente de cuál sea. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Lisa expresó su desacuerdo con tal perspectiva y me dijo que pensaba que «tener un castillo era un privilegio, no un techo sobre su cabeza». Además, el actual estado precario de mantenimiento de las viviendas públicas hacía que fuera muy difícil mantener la *performance* de gratitud incondicional esperada por el Gobierno.

No obstante, este sentido de gratitud puede cambiar dramáticamente dependiendo de la trayectoria de vida de cada residente. Carla, por ejemplo, una mujer mayor e inmigrante de Brasil, me recordaba constantemente durante una entrevista lo agradecida que estaba por su casa con el Gobierno australiano. Cuando la visité en su casa quiso enseñarme su tarjeta de sanidad australiana, llamada *Medicare*. Además, me habló de la buena relación que tenía con sus médicos, todos con consultorios cerca de su casa. Al entrar en el apartamento, Carla también me lo enseñó con orgullo y me contó cómo un inspector que había ido recientemente a su casa la había felicitado por su limpieza. Así, mientras me preparaba un café, me contó todas las «cosas buenas» que recibió del Gobierno australiano. Me describió en detalle cómo había conseguido un profesor de inglés del Gobierno para que la apoyara cuando falleció su esposo. También estaba muy contenta con sus vecinas, que eran en su mayoría mujeres, y con las cuales había desarrollado una fuerte red de solidaridad.

Carla estaba agradecida por su vida en Waterloo, especialmente cuando la comparaba con sus experiencias previas con los servicios públicos en su ciudad de origen, Minas Gerais, en Brasil. El hecho de que ella no fuera inicialmente «ciudadana australiana», por no haber nacido allí, también contribuyó a esta percepción. Carla interpretaba los servicios públicos de buena calidad como actos de generosidad, en lugar de un derecho. Para

ella, los servicios sociales del Estado podrían considerarse derechos para ciudadanos australianos nacidos y criados en el país, como parte de un contrato social entre el Estado y aquellos con estatus de ciudadanía formal. Por eso, para Carla, una mujer inmigrante, haber conseguido una casa pública en Australia tenía un significado especial.

Sin embargo, la gratitud de Carla tampoco estaba exenta de contradicciones. Cuando yo me estaba preparando para salir de su casa, al final de nuestro encuentro, ella me ofreció algunas de sus ropas, diciéndome que ya había comenzado a organizar su mudanza. Aunque los procesos de mudanza y realojo necesarios para las obras de renovación de Waterloo no han empezado hasta la fecha, en 2019 Carla ya había iniciado su proceso de mudanza. Me confesó que estaba devastada por la noticia de que tendría que irse, sin muchas justificaciones ni consultas por parte del Gobierno. Con este acto, me demostró un sentimiento doble de gratitud y tristeza. Aunque agradecida, ella no podía dejar de demostrar su tristeza y decepción actual con el Gobierno.

Los sentimientos encontrados experimentados por Carla, y muchos otros residentes de Waterloo, también pueden entenderse como el resultado de la relación paternalista entre el Estado y sus ciudadanos. Como parte de esta relación, los ciudadanos pueden experimentar simultáneamente protección y violencia por parte del Estado. Pacheco (2014) define la tutela como una forma de dominación marcada por el ejercicio de la mediación, anclada en los principios contradictorios de protección y represión. Tal paradoja constituye una forma particular de relación social donde cada una de estas relaciones —protección o represión— puede ser accionada en diferentes contextos y momentos, dependiendo del propósito. Fundamentalmente, esta forma de dominación limita la autonomía de los sujetos a partir de una figura de autoridad encargada de intermediar, orientar, e incluso proteger con especial atención determinados ciudadanos. No obstante, según Pacheco, la paradoja central de este sistema es que, una vez de que estos ciudadanos reciban acciones de protección, pasarán a estar directamente sujetos a un control estatal mayor sobre su vida cotidiana, más que cualquier otro ciudadano común.

Esta forma de relación comparte paralelos significativos con los modos históricos de control y gobierno del territorio en países colonizados como Australia. Los misioneros, por ejemplo, ignoraron o prohibieron los idiomas originales de los pueblos aborígenes, enseñándoles un nuevo idioma mientras les imponían valores y rituales cristianos. En un intento de obligar a las comunidades aborígenes a adoptar las costumbres de los colonizadores, justificaban esta práctica como una mejora en sus vidas. En este sentido, siguiendo una lógica paternalista, la renovación urbana de Waterloo se convierte en una guerra justa contra las conductas vistas como antisociales, y una forma de liberar a los vecinos de sus propios males.

De esta forma, los discursos públicos se alimentan de la economía moral que sostiene las dinámicas de dar, recibir y retribuir de viviendas públicas, para así justificar una necesidad supuestamente urgente de intervención estatal en Waterloo. Aquí, las dinámicas de economía moral local, una vez más, se encuentran con relaciones políticas y económicas más amplias que incentivan la acumulación de capital y la reproducción de desigualdades estructurales. La renovación urbana de Waterloo se presenta como una acción necesaria para recuperar el área físicamente degradada, pero, principalmente, para transformar moralmente a sus residentes.

5. Incumpliendo la obligación

La relación entre un inquilino de vivienda pública y el Estado no termina en el acto de recibir, sino que continúa en el trabajo diario para mantener la vivienda como habitable. En consecuencia, el análisis de lo que sucede *después* de que los residentes de Waterloo reciben una vivienda se vuelve central para comprender las moralidades cotidianas asociadas con el esfuerzo de mantenimiento de la vivienda, especialmente frente al fracaso del Estado en cumplir con la obligación de mantenerlas en condiciones adecuadas y dignas.

La investigación oficial del Gobierno de Nueva Gales del Sur sobre el mantenimiento de viviendas públicas de 2016 (*Inquiry into Public Housing Maintenance*) reveló una situación dramática. Según el informe, los

inquilinos de viviendas públicas enfrentan múltiples problemas: largos períodos de espera que en algunos casos llegan a más de quince años; problemas recurrentes causados por las reparaciones llamadas *patchworks*, o parches; un número creciente de solicitudes —un promedio de cuatro por residente en un año—, y un número cada vez mayor de residentes que recurrieron a acciones legales y grupos de defensa locales para realizar las reparaciones (Legislative Assembly of New South Wales, 2016). En consecuencia, el informe muestra una preocupación por la acumulación de problemas no resueltos y sus impactos en la seguridad y la salud de los inquilinos, incluyendo la mala ventilación, la contaminación del agua, los pisos resbaladizo y, las alergias, así como las infecciones respiratorias y de piel causadas debido al exceso de moho.

Estas experiencias subyacen a un sistema de obligación mutuo implícito en la provisión de vivienda en el que una de las partes ignora sus obligaciones. Como se demuestra en los resultados del informe, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha incumplido constantemente sus obligaciones legales y morales hacia sus inquilinos. Mientras los residentes buscan adherirse a las normas y reglas acordadas, el Estado no les corresponde y no cumple con su obligación de ofrecer seguridad y el mantenimiento de las viviendas.

Como destaca Oliveira (2004), las obligaciones asociadas al sistema de intercambio de dádivas no solo reafirman los derechos de todas las personas involucradas, sino también el reconocimiento mutuo de la dignidad entre las partes. Por tanto, leyendo la provisión de vivienda en estos términos, es posible comprender cómo la negativa de cumplir con la obligación moral de su mantenimiento, en la práctica, niega la identidad del otro. Como resultado, el conflicto que surge de la falta de voluntad del Estado para mantener la vivienda pública está relacionado no solo con las condiciones materiales de un entorno de vida adecuado, sino con las demandas de que se reconozca la ciudadanía y dignidad de sus residentes. Siguiendo esta lógica, este conflicto también puede explicarse por un desajuste entre las diferentes percepciones de la provisión de vivienda. Mientras los Gobiernos neoliberales tienden a percibirlo como una transacción impersonal y estrictamente económica, calculando constante-

mente sus costos y beneficios potenciales, los inquilinos lo perciben y lo viven como un intercambio social y recíproco fundado en obligaciones morales mutuas.

6. Conclusión

Alexander (2018) propuso que el *hogar* constituye un escenario privilegiado para comprender cómo los inquilinos de viviendas públicas interactúan con las autoridades gubernamentales y, a través de esta experiencia, construyen su comprensión de la ciudadanía. Consecuentemente, argumenta que el análisis de las economías morales ofrece una estrategia para comprender las múltiples formas de demanda de vivienda y ciudadanía y, en particular, las formas en las cuales los inquilinos dan sentido a sus derechos mientras lidian con cambios políticos y económicos más amplios.

Partiendo de esta premisa, este artículo analizó cómo las economías morales asociadas al sistema de viviendas públicas justifican el proyecto de renovación del barrio de Waterloo y profundizan relaciones de desigualdad estructural en Sídney. Cabe recordar que el plan de renovación de Waterloo se inserta en una lógica más amplia de urbanismo neoliberal que pone en el centro de sus decisiones la creación de oportunidades de plusvalía. Esta lógica puede ser observada en la venta de terrenos públicos y en la ausencia de inversión pública en la construcción de más viviendas, así como en el propio modelo del *social mix*.

En este contexto, el artículo exploró diferentes situaciones íntimas, cargadas de valor moral, que producen y reproducen creencias problemáticas sobre los ciudadanos buenos y malos, legítimos o no de recibir una vivienda. La circulación de dichos valores, como argumento en este artículo, sostiene y posibilita las prácticas de urbanismo neoliberal, dado que las economías políticas se materializan a nivel local a través de dinámicas de normas, significados y prácticas concretas que definen las fronteras entre lo moral e inmoral (Narotzky, 2015). Así, el artículo examina cómo los inquilinos deben demostrar constantemente su merecimiento para recibir ayudas del Gobierno, además de enseñar gratitud. Estos mismos inquilinos también deben convivir con el control social sobre sus deseos, así como la culpa o la vergüenza hacia comportamientos vistos como in-

morales, como fumar o viajar al extranjero por placer. En este contexto, también es revelador cómo los diferentes inquilinos e inquilinas perciben el régimen moral de las viviendas públicas como no recíproco, ya que el Gobierno deja de cumplir, sistemáticamente, con su obligación legal y moral de mantener las viviendas en condiciones dignas.

En resumen, las situaciones vividas e interpretadas por inquilinas como Carrie, Lisa, Sophia y otras residentes revelan cómo los residentes de viviendas públicas experimentan, luchan y tratan de dar sentido a los cambios de políticas en sus vidas diarias, como, por ejemplo, con el fin de los contratos de alquiler indefinidos. A través de sus historias concretas, demuestran cómo las economías morales de Nueva Gales del Sur reproducen desigualdades estructurales, al mismo tiempo que funcionan como una forma de dominación y violencia simbólica al producir experiencias de culpa, humillación, o (des)merecimiento. En esencia, con este análisis el artículo busca resaltar el protagonismo de la dimensión moral, enseñando como esta es fundamental para la perpetuación de las políticas económicas actuales.

Agradecimientos

Agradezco a los vecinos y vecinas de Waterloo por recibirme en su barrio y compartir generosamente sus historias de vida. Quiero también mostrar mi respecto al pueblo Gadigal de la nación Eora, poseedores de los derechos sobre la tierra en la que he realizado mi trabajo de campo. Agradezco a mis directores de tesis, Joan Josep Pujadas (Universidad Rovira i Virgili), Jesús Sanz (Universidad Complutense) y Greg Downey (Universidad Macquarie), por su apoyo y orientación durante esta investigación. Este trabajo también cuenta con el apoyo y financiación de la Macquarie University Cotutelle Research Excellence Scholarship y la Macquarie University Fieldwork Research Grant.

Bibliografía

- ALEXANDER, C., BRUUN, M. H. y KOCH, I. (2018). «Political Economy Comes Home: On the Moral Economies of Housing». *Critique of Anthropology*, 38 (2), 121-139.
- AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE (2020). *Housing assistance in Australia*.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, L. R. (2004). «Honra, dignidade e reciprocidade». En B. F. NUNES y P. H. MARTINS (eds.), *A nova ordem social: perspectivas da solidariedade contemporânea* (pp. 122-135). Brasília: Editora Paralelo 15.
- FASSIN, D. (2009). «Moral economies revisited». *Annales. Histoire, Sciences Sociales, Editions de l'E.H.E.S.S*, 6, 1237-1266.
- FOUCAULT, M. (1991). *Discipline and punish: the birth of the prison*. London: Penguin Books.
- GÖTZ, N. (2015). «'Moral economy': its conceptual history and analytical prospects». *Journal of Global Ethics*, 11 (2), 147-162.
- HAYWARD, D. (1996). «The Reluctant Landlords? A History of Public Housing in Australia». *Urban Policy and Research*, 14 (1), 5-35.
- HENDERSON REPORT (1975). *Poverty in Australia: First Main Report*. Canberra.
- LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NEW SOUTH WALES (2016). *Management of NSW Public Housing maintenance contracts*.
- MAUSS, M. (1923). «The gift: forms and functions of exchange in archaic societies». En *Sociologie et anthropologie*. Paris: Presses Universitaires de France.
- MORRIS, A. (2018). «The Residualisation of Social Housing in Australia and Its Impacts on Older Tenants». En É. NÍ SHÉ, L. J. BURTON y P. A. DANAHER (eds.), *Social Capital and Enterprise in the Modern State* (pp. 45-61). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- MURIEL, I. S. (2009). *Etnografía del aprovisionamiento de vivienda en el barrio berlinés de Friedrichshain*. Universitat de Barcelona.
- NAROTZKY, S. (2015). «The payoff of love and the traffic of favors: Reciprocity, social capital, and the blurring of value realms in flexible capitalism». En J. KJAERULFF (ed.), *Flexible Capitalism: Exchange and Ambiguity at Work* (pp. 268-310). Oxford: Berghahn.
- NSW GOVERNMENT (2010). *Residential Tenancies Act*.

- PACHECO DE OLIVEIRA, J. (2014). «Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios». *Mana*, 20 (1), 125-161.
- PALOMERA, J. (2016). «Reciprocity, commodification and poverty in the era of financialisation». *Current Anthropology*, 55 (S9), S105/S115.
- PALOMERA, J. y VETTA, T. (2016). «Moral economy: Rethinking a radical concept». *Anthropological Theory*, 16 (4), 413-432.
- PAWSON, H., VIVIENNE, M. y YATES, J. (2019). «Social Housing in Australia: Evolution, Legacy and Contemporary Policy Debates». En: *Housing Policy in Australia: A Case for System Reform* (pp. 87-134). London: Palgrave Macmillan.
- PEEL, M. (2003). *The Lowest Rung: Voices of Australian Poverty*. Cambridge: Cambridge University Press.
- POLANYI, K. (2001). *The Great Transformation*. Boston: Beacon Books.
- ROGERS, D. y DARCY, M. (2020). «Public housing 'renewal' likely to drive shift to private renters, not owners, in Sydney». *The Conversation*. Disponible en: <<https://theconversation.com/public-housing-renewal-likely-to-drive-shift-to-private-renters-not-owners-in-sydney-133352>>
- SCOTT, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven/London: Yale University Press.
- THOMPSON, E. P. (1971). «The moral economy of the English crowd in the 18th century». *Past & Present*, 50, 76-136.
- TROY, P. N. (2012). *Accommodating Australians: Commonwealth government involvement in housing*. Annandale, NSW: Federation Press.
- WYNNE, L., CONDIE, J., SISSON, A. y CHATTERJEE, P. (2018). «We still live here: public housing tenants fight for their place in the city». *The Conversation*. Disponible en: <<https://theconversation.com/we-still-live-here-public-housing-tenants-fight-for-their-place-in-the-city-107188>>